

Crónica del mes

Marzo

Sin duda alguna, el mes de marzo sirvió de escenario para la redefinición de la configuración de fuerzas políticas para los próximos tres años. Las elecciones legislativas y municipales que se desarrollaron en este mes, pese a que no implicaron un cambio radical en las posiciones de los principales partidos políticos, sí se revistieron de un carácter particular, sobre todo en cuanto a los discursos que predominaron antes, durante y después del período electoral. Diferentes sectores de la sociedad —entre los cuales sobresalieron la empresa privada, los medios de comunicación, asociaciones civiles y, por supuesto, los medios de comunicación social— enfilaron todos sus recursos para hacer de este período electoral una etapa caracterizada por el enfrentamiento constante. Finalmente, la huelga que médicos y trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) mantenían por cuarto mes consecutivo llegó a su fin, no sin antes alcanzar un nivel extremo de conflictividad entre las partes. De esta manera, la dinámica sociopolítica volvió a ocupar los principales espacios de la agenda de los medios informativos durante este mes.

Para comenzar, en el plano político los principales protagonistas fueron los candidatos a la alcaldía de San Salvador de los dos partidos mayoritarios —el empresario Luis Cardenal por ARENA, y Héctor Silva por la coalición FMLN-USC-Iniciativa Ciudadana— y los máximos representantes de los institutos políticos. Durante el mes pasado, la novedad había sido la realización de un debate entre todos los candidatos a dirigir esta estratégica municipalidad. Para el mes de marzo faltaban dos de esos encuentros, dedicados exclusivamente a Silva y Cardenal, y organizados por dos canales de televisión nacional. El 28 de febrero, Silva se mostraba aún reacio a aceptar las invitaciones para

participar, previendo un posible desgaste en su imagen. De hecho, su trabajo proselitista no tuvo la mayor de las tranquilidades a su favor, puesto que el Comité Pro-Rescate de San Salvador (organización civil creada al calor de la campaña electoral) se había dedicado a incriminar a Silva y a sus concejales de malversar los fondos municipales y de mentir a la población. Ese mismo día, representantes del Comité se presentaron en las instalaciones del Relleno Sanitario de Nejapa para denunciar supuestos cobros indebidos por el uso del servicio ahí ofrecido. En el marco de una acalorada discusión con representantes del relleno, un incendio se produjo inexplicablemente en la zona donde los pepenadores habían levantado sus hogares con cartón y lata. Cinco familias perdieron sus pertenencias, mientras que los presentes se acusaban mutuamente de provocar el siniestro para perjudicar su imagen.

El 1 de marzo, se dijo que los daños en el lugar alcanzaban el millón de colones. La posibilidad de interponer una demanda para que la Fiscalía General de la República investigara el origen del hecho quedó abierta. Mientras tanto, los diputados en la Asamblea Legislativa aprovechaban hasta el último minuto para beneficiarse lo más posible de cara a las elecciones legislativas y municipales. Durante una sesión plenaria se decidió “abrirle campo” a los partidos pequeños dentro de la Juntas Receptoras de Votos (JRV), de tal manera que el número de sus miembros fuera de seis distribuidos de la siguiente manera: cinco para cada uno de los partidos que se hubieran colocado en los cinco primeros lugares durante la elección presidencial pasada y uno para rifarlo entre los demás institutos políticos. El 2, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dudaron no sólo de la legalidad de la reforma, sino principalmente de la

posibilidad de llevarla a cabo en tan poco tiempo. Ese mismo día se realizó el segundo debate entre Silva y Cardenal. Prácticamente todos los medios informativos del país se volcaron a cubrir el evento. Entre preguntas mediocres y ataques encubiertos, el debate se desarrolló con normalidad. En suma, los candidatos repitieron buena parte de los contenidos de sus respectivas propuestas de gobierno municipal y nadie se atrevió a cuestionar con un mínimo de profundidad acerca de algunas de las promesas más sonadas de los dos políticos.

Entre tanto, en un hotel capitalino, los máximos representantes de ARENA, FMLN, PDC, CDU y PAN expusieron sus respectivas propuestas legislativas. Pese a que la relevancia del evento era a todas luces superior a la del debate entre los candidatos a alcalde, al lugar llegaron sólo unos cuantos reporteros. El 4, el partido ARENA cerró su campaña electoral con una concentración en la Alameda Roosevelt. Mariachis, baile y cincuenta mil porciones de pollo empanizado atrajeron de todas partes del país a una buena cantidad de personas que se movilizó hasta la Roosevelt en autobuses pagados por el partido. Algunos miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) y los candidatos más importantes a cargos públicos hablaron hasta la saciedad en contra del FMLN y de Silva. En fin, nada que no se hubiera observado en otros períodos electorales. Al día siguiente, el presidente del COENA, Alfredo Cristiani, aseguró que los líderes actuales del partido tenían que estar conscientes de las "transiciones ordenadas" que se estaban produciendo. De lo contrario, concluyó, el partido moriría. Ese mismo día se llevó a cabo el último de los debates entre los candidatos a la alcaldía de San Salvador de ARENA y la coalición FMLN-USC-Iniciativa Ciudadana. Nada nuevo se podría rescatar de este evento. De hecho, lo que más sobresalió de él fue la participación del público en las preguntas hacia los candidatos.

El 6, en un hecho muy criticado por la opinión pública, representantes de la Unión de Partidos Políticos Latinoamericanos (UPLA) expresaron públicamente su preferencia política hacia Luis Cardenal y todos los candidatos en contienda del partido ARENA. Las declaraciones de los políticos fueron cubiertas ampliamente por los medios informativos, pero en ningún momento al Ministro del Interior, Mario Acosta, se le cruzó por la cabeza sancionar a estos extranjeros que habían decidido involucrarse en política. Unos días antes, una mo-

delo cubana había sido deportada hacia su país de origen bajo este y otros argumentos. El 7, en un sorpresivo operativo coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR), la alcaldía de San Salvador fue allanada para conocer el estado de los cobros que se realizan por el uso del Relleno Sanitario de Nejapa. El ministerio público se tardó cinco días en admitir la demanda presentada por un estudiante de derecho. Con la misma agilidad, se presentaron a las 9:00 am para registrar los archivos anteriores y posteriores a la apertura del Relleno. Sin embargo, bajo un casi absoluto hermetismo, la acción judicial terminó a las 12:30 de la madrugada del día siguiente. Inmediatamente, funcionarios de la alcaldía, pese a que calificaron de "normal" el procedimiento de la Fiscalía, especularon acerca de las motivaciones políticas del mismo. Hasta el fin del mes aquí reseñado, la FGR no había hecho pública ninguna resolución al respecto.

Así las cosas, llegó la víspera de las elecciones. Los partidos políticos invertirían millones de colones para movilizar a sus bases durante el evento. Mientras tanto, el más que nunca paranoico presidente Francisco Flores se tomó la libertad de "fustigar" supuestos intentos de boicot de parte de "fuerzas que todavía no creen en la democracia". El presidente advirtió a quienes no votaran que, con su actitud, permitirían la victoria de "los que piensan que la violencia y el desorden son la solución" a los problemas del país. El 12, después de haber ejercido el voto, Flores se presentó ante los medios para repetir el mismo mensaje. El coordinador general del FMLN, Fabio Castillo, se mostró decepcionado por esas declaraciones, propias de "un militante político desesperado que subliminalmente está queriendo engañar a la población haciendo un llamado al voto por un partido", expresó. Pero no sólo estos hechos sobresalieron durante las elecciones. Los típicos desórdenes en el padrón electoral dificultaron —y en algunos casos hasta impidieron— el voto para algunas personas. Al final de la jornada, en algunos centros de votación se restringió el acceso de la prensa, sobre todo en San Salvador.

Sin embargo, un poco antes de las 9:00 pm, Héctor Silva se presentó ante los medios para proclamar su victoria, reconocida ya por Cardenal. En su alocución, Silva llamó a la empresa privada, al gobierno y a los demás alcaldes del Gran San Salvador a firmar un pacto de gobernabilidad para de-

sarrollar “los grandes proyectos” que el área metropolitana de San Salvador necesitaba. Por su parte, el derrotado candidato de ARENA, en compañía de los miembros del COENA, protagonizó una lastimera conferencia en la que aceptó la derrota en las urnas. El empresario lamentó no haber podido llevar “lo suficientemente bien” su mensaje a la población del municipio y aseguró que los verdaderos perdedores eran los habitantes de San Salvador. Muchos areneros derramaron sus lágrimas —por odio o decepción, quien sabe— frente a la certeza de que el FMLN gobernaría más municipalidades que en el período anterior y que su predominio en la Asamblea Legislativa había sufrido un fuerte revés.

El 13, debido a las especulaciones que hiciera la cúpula de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) con respecto al repunte del FMLN en las elecciones legislativas, Fabio Castillo sostuvo que ningún empresario que estuviera dentro de la ley debería temer por sus propiedades. A la vez, Castillo aseguró que los diputados del FMLN se habían comprometido a trabajar por el fomento de la actividad económica nacional. Estas declaraciones fueron confirmadas cuando, el 13, el TSE reveló los resultados preliminares de las elecciones: el FMLN tendría 31 diputados, dos más que ARENA. Por su parte, el PCN se posicionaba en la tercera posición con 14 diputados, seguido por el PDC con 5. La nueva configuración de fuerzas, aunque no variaba mucho de la del período que se aproximaba a su fin, retiraba a ARENA la facultad de “aplanar” en la Asamblea con el apoyo del PCN y del PDC. Para ganar la mayoría calificada (56 votos), necesariamente habría que buscar el aval del FMLN. A juicio de Castillo, lo más importante era demostrar que la nueva composición de fuerzas podía funcionar, aunque ésta tendiera a afianzar una especie de bipartidismo. Además, la carrera por ganar la presidencia del Congreso quedaba abierta.

Ese mismo día, el atribulado Cristiani apoyaba la necesidad de que el partido de gobierno experimentara cambios que le procuraran una estabilidad política mejor para las próximas elecciones. Esto no le impidió criticar nuevamente al alcalde electo de San Salvador: el pacto de gobernabilidad que Silva ofreció días atrás había surgido, según el máximo líder arenero, del proyecto municipal de Luis Cardenal. Por su parte, el 14, la ANEP respondió aireada frente a la propuesta legislativa del

FMLN, sobre todo en el área económica. Ricardo Simán, presidente de la gremial, no sólo pidió “sensatez” al partido de izquierda, sino que calificó de populista la propuesta de reducir el IVA enarbolada durante la campaña electoral. Mientras, en el TSE el conteo definitivo de los votos quedó temporalmente bloqueado, luego de que el PDC solicitara una revisión para los departamentos de Usulután, La Libertad, Sonsonate, Ahuachapán y La Unión. De llegar a ser ciertas sus sospechas, los pedecistas iban a tener no cinco sino diez diputados en la asamblea. También el novel Partido Acción Nacional (PAN) presentó sus reclamos.

En este contexto, la dirigente arenera Gloria Salguero Gross calificó de catastróficos los resultados electorales. Por otro lado, el diputado y miembro del COENA, Jesús Grande, fue más allá al culpar directamente a Francisco Flores del declive arenero por “darle largas” al conflicto del ISSS. El mandatario, haciendo caso omiso de todos los señalamientos que sobre él caían, convocó de emergencia a su gabinete de gobierno para analizar los resultados electorales y, como una respuesta al llamado hecho por Silva para firmar un pacto de gobernabilidad, aseguró que estaba dispuesto a trabajar concertadamente con todos los diputados y alcaldes electos el 12 de marzo. Ese mismo día, se supo que Milena Calderón de Escalón y Walter Araujo habían puesto a disposición de las autoridades del COENA sus cargos dentro de la máxima estructura del partido de derecha. La motivación de Calderón era propiciar los cambios necesarios para renovar el partido antes de las próximas elecciones. En adelante, el COENA emprendió un proceso de evaluación interna que, según se especuló, estaría sentando las bases para los anunciados cambios.

El 17, a la luz de la publicación de resultados cada vez más definitivos sobre las elecciones, se supo que el FMLN gobernaría aproximadamente un 40.48 por ciento de la población nacional debido a los municipios que había ganado. En el gran San Salvador, este partido estaría a la cabeza de más del 88 por ciento de la población, frente a casi un 12 por ciento de ARENA. Pero estos datos no fueron confirmados sino hasta el 18, cuando el TSE anunció que el escrutinio de los votos había finalizado. Así, ARENA habría ganado 127 alcaldías, mientras que el FMLN se encargaría de 77, incluyendo aquellas que había logrado en coalición con otros partidos. Los resultados legislativos

se mantuvieron prácticamente invariables. Con esto, la preocupación de los partidos era definir las figuras que ocuparían los cargos directivos en la Asamblea. El 20, el FMLN, que no dudaba en adjudicarse la presidencia, decidió proponerle a Flores el inicio de un proceso de concertación para definir las prioridades del gobierno durante los próximos tres años, en lugar de adoptar como punto de honor la distribución de la directiva del legislativo. Con esta propuesta, el partido de izquierda le tomaba la palabra al presidente en sus reiterados llamados a buscar soluciones concertadas a los problemas de la nación.

Entretanto, el revuelo interno del partido ARENA seguía haciendo de las suyas. El 21, Cristiani anunció que el COENA convocaría a un congreso general para analizar los puntos que, paradójicamente, se venían analizando desde que se supo la suerte del partido en las elecciones: cambios en los estatutos, remociones de figuras del COENA, cuotas de participación de los funcionarios activos, etc. Ese mismo día, el presidente Flores hizo lo suyo para consolar a los candidatos que no habían tenido la oportunidad de gozar un puesto en el congreso. La intención de Flores era ofrecerles puestos en el gabinete en vista de una inminente reestructuración del mismo. Sin embargo, el 22, algunos de los convocados restaron credibilidad a la promesa presidencial y argumentaron que desde que el mandatario había asumido su cargo se les venía ofreciendo lo mismo. El 23, envalentonados por su victoria en el legislativo, Fabio Castillo y otros miembros de la cúpula del FMLN se presentaron a la cede del partido ARENA para invitarlo a participar en un proceso de diálogo, cuyo fin era presentarle un proyecto político concertado a Flores. Ningún representante de alto rango del partido de gobierno los recibió.

En respuesta, el mandatario recordó que, por orden de llegada, el Frente era el tercer partido que le solicitaba dialogar. Por ello, dijo, él estaba dispuesto a concertar con toda la Asamblea y no con alguna fracción en particular. Al día siguiente, ARENA aceptó la invitación del FMLN con la condición de que en el diálogo participaran también las otras fuerzas políticas. El 27, desatendiendo ese orden de llegada del que había hablado, Flores sostuvo una reunión con los diputados de su partido que ejercerían durante los próximos tres años. Con la reunión, el mandatario pretendía coordinar el trabajo entre la fracción arenera y su

gabinete para las promesas hechas durante las campañas electorales pasadas. Después de conversar con sus correligionarios, el presidente dedicó un espacio del día para recibir a Schafik Handal, jefe de fracción del FMLN, y discutir con él la propuesta de concertación que se le había hecho llegar días atrás.

En el plano social, marzo comenzó en medio de un estancamiento en la crisis del ISSS. Las autoridades del Seguro habían amenazado con recurrir nuevamente a los despidos si los huelguistas no desistían de mantenerse en paro. Pero esto no amedrentó a los representantes del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS), quienes desestimaron, el 28 de febrero, las advertencias del gobierno. Óscar Aguilar, secretario general del sindicato, aprovechó la ocasión para aclarar a la opinión pública que las acciones que el gremio había iniciado el 15 de noviembre del año pasado no tenían ningún tipo de motivación que no fuera laboral. Para entonces, tanto los sindicalistas como las autoridades del Seguro estaban a la espera de un pronunciamiento de la Corte de Cuentas con respecto a los descuentos y retenciones que la directiva de la institución había hecho durante los meses que llevaba la huelga.

Mientras tanto, las autoridades del ISSS se empeñaban en llevar adelante sus planes alternativos de atención médica. Ese mismo día se incorporó la modalidad de consultas a domicilio para pacientes recién operados. Sin embargo, al terminar el conflicto, este procedimiento no pareció haber dado los frutos esperados. El 2 de marzo, los sindicalistas realizaron una inusual protesta en las calles aledañas a los hospitales Rosales, Maternidad, 10. de Mayo, Especialidades y Médico Quirúrgico. En esta ocasión, un grupo de pacientes los acompañaron en un acto que los medios no tardaron en calificar como una perversa manipulación de parte de los sindicalistas. A la escena se incorporó, con su típica prepotencia, el Ministro del Interior, Mario Acosta, quien aseguró que los huelguistas no sólo buscaban prebendas salariales, sino también "hacerle el juego" al FMLN de cara a las elecciones que se aproximaban. Ninguno de los miembros de la dirigencia sindical le dio mayor importancia a sus declaraciones.

Entre tanto, los llamados a la negociación se iban haciendo cada vez más escasos. Este clima de alejamiento progresivo provocó que, el 3, un grupo de médicos retirados exhortara a los huelguis-

tas a deponer las medidas de presión que impulsaban por considerarlas dañinas para la población asegurada. Pese a que las declaraciones de estos médicos no beneficiaron del todo las reivindicaciones de los sindicalistas, tampoco se colocaron a favor de los planes alternativos impulsados por las autoridades del ISSS. A juicio de los llamados "notables", estos planes eran insuficientes para dar abasto a la demanda de servicios de salud. En respuesta a estas aseveraciones y a las críticas hechas por los sindicalistas, Ana Vilma de Escobar, directora del ISSS, aseguró que la consulta alternativa que ofrecían en clínicas privadas, comunales y empresariales, en la Feria Internacional y en las brigadas militares del país, atendía diariamente a unas 7 mil personas. Asimismo, la funcionaria aseguró que el apoyo a la huelga se había reducido, puesto que en lugar de ser apoyada por 2 400 empleados y médicos, en ese entonces sólo 1 067 se encontraban en paro.

El 6, a pocos días de que se realizaran las elecciones legislativas y municipales, los sindicalistas protagonizaron un fuerte choque con agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC en los alrededores del Hospital Médico Quirúrgico. Los sindicalistas habían iniciado una manifestación en el lugar a tempranas horas, bajo la supuesta promesa de concluir al mediodía. Empero, los agentes de la UMO procedieron intempestivamente a atacar con gases lacrimógenos y con un cañón de agua —cuyo "estreno" fue prácticamente elogiado por los periodistas de un reconocido matutino nacional— no sólo a los huelguistas, sino también a cuanta persona se encontraba cerca. Los gases afectaron a varios pacientes de los hospitales aledaños y al menos una persona resultó con heridas mayores tras el altercado. Las reacciones que surgieron inmediatamente después sirvieron no tanto para aclarar a la opinión pública el origen de la confusa acción policial, como para confirmar ante la opinión pública las implicaciones políticas del hecho.

Al lugar se presentó Fabio Castillo, coordinador general del FMLN, junto con otros legisladores del partido para, según sus palabras, verificar los daños que pudieran haber sufrido las instalaciones de salud. El abogado no descartó la posibilidad de interponer una demanda en contra del Estado por violación a los derechos humanos. Shafick Handal, jefe de fracción del partido de izquierda, aseguró que los policías actuaron por ór-

denes directas de las autoridades de la PNC, por lo cual Mauricio Sandoval tendría que asumir la responsabilidad por esa acción. En respuesta, el director de la corporación policial aseguró que los agentes de la UMO sólo se habían defendido de las piedras que les lanzaban los manifestantes. Además, a juicio del Ministro de Seguridad, Francisco Bertrand, la prioridad no era otra más que despejar las calles que estaban bloqueadas desde las 8:00 de la mañana. Cualquier alusión al acuerdo de despejar las calles al mediodía quedó fuera de la discusión para el funcionario. Por su parte, el vicepresidente Carlos Quintanilla acusó a los médicos de degenerar sus acciones hasta aproximarse a unos "mareros". Al atardecer, los indignados médicos y trabajadores del ISSS se pronunciaron enérgicamente frente a la agresión de la PNC y exigieron la dimisión de todo el gabinete de gobierno, Flores incluido, por considerar que no eran capaces de sobrellevar de manera civilizada la crisis del sistema de Seguridad Social.

El 7, los sindicalistas no amainaron ni sus demandas ni la forma como las exigirían al gobierno de Francisco Flores. Se tomaron parte de la Alameda Juan Pablo II, la carretera Troncal del Norte, el Bulevar del Ejército y la carretera Sonsonate-Acajutla. Muchas unidades del ISSS sufrieron los efectos del recrudecimiento de la presión sindical. En algunos casos y sin justificar la medida, la PNC desplegó helicópteros para sobrevolar las áreas afectadas. Las amenazas llegaron a un nivel crítico cuando los sindicalistas aseguraron que abandonarían todos los hospitales nacionales si el gobierno no se sentaba a negociar con ellos inmediatamente. En respuesta, Jorge Nieto, Ministro del Trabajo y miembro de la directiva del ISSS, dijo que tal amenaza le tenía sin cuidado, puesto que el gobierno contaba con una bolsa de trabajo —compuesta por unas 500 personas— que les permitiría reemplazar a quienes faltaran a su deber como médicos. Ese mismo día, los medios escritos lucieron entre sus páginas un mensaje del presidente Flores en el que calificaba a los huelguistas como "pequeños grupos de presión que abogan por más privilegios de los que ya tienen" y cuyas acciones no le habían permitido ofrecer al país lo que había prometido.

El 8, se desató una actitud en extremo desafiante de parte del gobierno. Este, por medio del Ministerio de Salud Pública, del Trabajo y de las autoridades del ISSS, no sólo se mostró despreo-

cupado ante la amenaza de los médicos de abandonar los hospitales, sino que les exigió presentar una carta formal en la cual renunciaran a sus puestos para proceder a nuevas contrataciones. Un escueto llamado a la reflexión culminaba la posición del gobierno. Nada de esto doblegó la voluntad de los sindicalistas. A las siete de la mañana del día siguiente, las llaves de todos los hospitales nacionales y del ISSS estarían en manos de representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, entrada la noche, el grupo de médicos retirados que hacía unos pocos días se había pronunciado a favor de la terminación de la huelga, preocupado porque de ninguna manera el gobierno podría hacer frente a la demanda de salud tras la entrega de los hospitales, logró que los sindicalistas pospusieran un día más la medida. La idea era acercar al gobierno a una pre-negociación que sentara las bases para definir soluciones a la crisis.

El 9, los hospitales no fueron entregados, pero nadie sabía si las negociaciones —a las que el obstinado equipo de trabajo de Flores había calificado como un simple “acercamiento”— lograrían allanar el camino para unos acuerdos definitivos. Las condiciones seguían siendo las mismas: el gobierno pedía la finalización de la huelga, mientras que los médicos y trabajadores pedían el reinstalo de los 221 colegas despedidos y la retribución de los salarios retenidos. Y, para acabar de ensombrecer el ambiente, Flores permitió que un matutino llenara cuatro páginas con una entrevista en la que el mandatario, literalmente, veía en las acciones de los sindicalistas una aproximación peligrosa hacia “la delincuencia o el terrorismo” que era necesario detener. Su discutible distinción entre una oposición pro-sistema y otra anti-sistema fue lo que más llamó la atención. También aprovechó para lanzar un golpe bajo al FMLN: lo implicó directamente en unas negociaciones secretas que habría mantenido con representantes de los sindicatos del ISSS y que habían tenido como mediador a Fabio Castillo.

Al día siguiente, el conflicto había llegado a un apresurado arreglo y, con ello, la huelga quedaba oficialmente suspendida. Se firmaron varios acuerdos en los cuales se establecían varios mecanismos para iniciar negociaciones y para normalizar los servicios de salud: se instalarían 4 mesas de trabajo conformadas por la dirección del ISSS, el Sindicato de Médicos Trabajadores (SIME-

TRISSS), el de Trabajadores de la institución (STISSS) y el Ministerio de Salud para discutir el cumplimiento de los acuerdos firmados el 21 de mayo de 1998; ambas partes se comprometerían a acatar los fallos de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Cuentas con respecto a los despidos y a los descuentos; se procedería a abrir los hospitales Roma y Amatepec bajo el sistema de concesión de servicios administrativos; no se tomaría ningún tipo de represalia en contra de los huelguistas, entre otras cosas. El 11, el clima de buena voluntad que se habría fomentado entre las partes en litigio fue puesto en duda cuando Ana Vilma de Escobar aseguró que el inicio de las conversaciones se debió a que los sindicalistas habían cedido ante su condición principal: el levantamiento de la huelga. La directora del ISSS no dudó en interpretar la intervención de Fabio Castillo, en las negociaciones anteriores, como la confirmación del carácter político de la huelga del ISSS. Por su parte, Guillermo Mata Benett, presidente del Colegio Médico, calificó de ridícula la lectura que el gobierno hacía del papel del FMLN en los disturbios del 6 de marzo.

No fue sino hasta el 14 que los primeros encuentros formales entre los sindicalistas y el gobierno empezaron a producirse. El Hospital Ginecológico sirvió de escenario para la primera discusión y, de entrada, el gobierno aclaró que estaba totalmente fuera de discusión la posibilidad de reinstalar a los 221 huelguistas despedidos durante el paro de labores. Bajo esta tónica, las conversaciones entre las partes se desarrollaron con excesiva lentitud. En la primera reunión sólo se llegó a discutir la composición interna de las mesas de negociación y, el 24, establecieron las fechas para comenzar la discusión de lleno. Ese día, tanto el secretario general del SIMETRISSS, René Zapata Nieto, como la directora del ISSS concordaron en que una de las prioridades del proceso de negociación era la forma en que se procedería a abrir los hospitales Roma y Amatepec. El 29, las autoridades de la institución anunciaron una serie de cambios sorpresa en la dirección de todos los centros asistenciales del sistema de Seguridad Social. Los cambios obedecían a la aplicación de un nuevo modelo de administración por medio de “gobiernos” de hospitales. Con la medida, se dijo, se estaba dando un paso a favor de la descentralización de servicios médicos en el ISSS. Finalmente, el 30, de Escobar aseguró que el retraso que existía en las mesas de negociación se debía a que aún

persistía el clima de rivalidad de parte de los miembros del STISSS.

En suma, durante el mes de marzo se desataron las tensiones que se venían acumulando desde varios meses atrás, no sólo por la realización de las elecciones legislativas y municipales, sino también por la forma como se resolvió el conflicto del Seguro Social. De ambas situaciones ya se ha hablado mucho. En términos generales, los resultados electorales mantuvieron dentro de los mismos márgenes a las principales fuerzas políticas del país —en especial al FMLN y a ARENA—, pero ello no implica que las nuevas relaciones que deberán establecer entre ellas tengan que seguir siendo las mismas. La próxima legislatura ya tiene una buena cantidad de trabajo pendiente y las promesas electorales están a la espera de ser cumplidas. En adelante, lo que se tendría que esperar de los nuevos y viejos actores políticos que empiecen a ejercer sus cargos desde el 1 de mayo es una nueva actitud, una nueva manera de enfrentar problemas y diferencias políticas en función de los problemas del país —sus características, sus raíces, sus manifestaciones—. Esto supone que los políticos no tendrían que obedecer ciegamente al beneficio político más coyuntural, sino que tendrían que sopesar con honestidad pros y contras de una decisión política. En este sentido, la distribución de cargos en la directiva de la Asamblea Legislati-

va será una prueba fundamental sobre este deseado cambio de actitud. Queda por ver de qué manera se resolverá esta encrucijada política: ¿volvemos a ver estancamientos y retrasos?, ¿privará el interés partidista, la necesidad de que una fracción prevalezca sobre las demás?, ¿o acaso veremos unos nombramientos que obedezcan a definición de perfiles e identificación de capacidades?

De la misma manera, el arreglo por el que se puso fin al conflicto del ISSS representa —tal vez más para el gobierno que para los sindicatos— una prueba de voluntades. Voluntades que se identifiquen con el diálogo y con la apertura de espacios de participación y verificación de los términos en que se prosiga con el cumplimiento de los acuerdos. Si la actitud que privó durante la huelga fue la pugna y la presión, se esperaría que la nota fundamental del proceso que se ha inaugurado ahora sea la disposición al diálogo. Habiendo superado ya los obstáculos que impedían la discusión directa y abierta de los problemas del sistema de Seguridad Social y del de Salud, lo que queda por delante es la búsqueda de soluciones. De parte del gobierno el compromiso es aún mayor, porque no sólo debe incorporarse de lleno y sin tapujos a la negociación (aunque con ello tenga que ceder en sus pretensiones modernizadoras), sino que debe demostrar que ha renunciado del todo al discurso polarizante que lo caracterizó en la etapa más álgida del conflicto.